

## LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

exigen que se refuerce la partida para los gastos sanitarios ocasionados por el coronavirus, como Castilla-La Mancha y Aragón (PSOE) o Castilla y León (PP). Ante la contrariedad de algunos líderes territoriales, el presidente destacó que, dentro de las áreas de gasto fijadas por el Gobierno, las comunidades podrán decidir el destino del dinero sin rendir cuentas al Ejecutivo central. “Lo harán a los ciudadanos a través de sus respectivos Parlamentos autonómicos”, apostilló. Alberto Núñez Feijóo (PP) pidió libertad para destinar a otros fines la parte de educación. El presidente gallego se quejó de la supresión de la bolsa de 1.000 millones destinada a otros gastos sociales.

La inquietud de algunas de las autonomías más afectadas por la covid-19, sobre todo del interior, es que se reduzca en 1.000 millones la partida para cubrir los gastos sanitarios. De esa reducción y de la prevista para otros gastos sociales, saldrán los 2.000 millones para educación. Tampoco

convenció a las comunidades más rurales que el fondo para transporte se reste de los 5.000 millones destinados a compensar la caída de ingresos, ya que entienden que solo favorece a las grandes áreas urbanas.

**Población y transporte**

Distinta, en este punto, es la visión de las comunidades más pobladas y con potentes sistemas de transporte público, como Madrid y Cataluña —las dos con mayor número de víctimas— o Andalucía. Ni la madrileña Isabel Díaz Ayuso ni el andaluz Juan Manuel Moreno, ambos del PP, se alarmaron por los nuevos criterios. Quim Torra sí protestó contra “los vaivenes” del Ejecutivo. El *president* considera que los nuevos criterios suponen para Cataluña una pérdida de “decenas de millones de euros” que no concretó. Y exigió un fondo para el transporte con “el doble o el triple” de la cantidad prevista, informa **Pere Ríos**. Torra reclama 15.000 millones de euros

de inmediato “para no ahogar a Cataluña”.

La España vacía concentró las críticas al Gobierno. El nuevo modelo “deja en la estacada a las comunidades que más han sufrido la pandemia”, afirmó tras la conferencia Alfonso Fernández Mañueco. El presidente de Castilla y León cree que no se tiene en cuenta la incidencia de la enfermedad en la comunidad más extensa y con la densidad de población más baja (25 habitantes por kilómetro cuadrado) junto a Castilla-La Mancha. “Este es un fondo extraordinario que tiene que ver con el grado objetivo de la afectación de la enfermedad, no con otros criterios. Y tanto La Rioja, Castilla y León o Castilla-La Mancha hemos tenido porcentualmente más impacto y hemos tenido que dejarnos la piel en gasto de material y contrataciones”, discrepó el socialista Emiliano García-Page. El presidente de Castilla-La Mancha llegó a expresar su temor a que el dinero para la educación vaya al sector privado y perjudique a comunidades como la suya, “con una consolidada red pública”. Sánchez dispuso esos temores en su comparecencia posterior en La Moncloa y aseguró que todo el dinero será para la pública.

Otro socialista, el aragonés Javier Lambán, puso el acento en el coste de garantizar la educación en las zonas rurales, donde las plazas “cuestan tres o cuatro veces más” que en las ciudades. Y pidió reconsiderar la anulación de la partida prevista para otras políticas sociales. El presidente cántabro, el regionalista Miguel Ángel Revilla, expresó su “profundo malestar” al entender que se prima más a la población en detrimento del coste del servicio.

Otros presidentes regionales consultados no comparten los reproches y vinculan la desaparición del fondo social a la puesta en marcha del ingreso mínimo vital. Dotado de 3.000 millones, el 26 de junio lo empezarán a cobrar 255.000 beneficiarios. “Entiendo que los presidentes autonómicos quieren más, más y más. Pero el Gobierno está haciendo una transferencia sin precedentes en la historia de la democracia”, zanjó Sánchez.

**Pedro Sánchez, durante su comparecencia ayer en La Moncloa.** / JAIME VILLANUEVA



**Los nacionalistas se exhiben como los socios prioritarios del Ejecutivo**

**Los contactos se reiniciarán con tres competencias de las 32 pendientes**

da presupuestada este año para la renta de garantía de ingresos autonómica, que asciende a 370 millones, además de otros 100 millones en ayudas asociadas a la vivienda. Euskadi se ahorrará los primeros 500 euros de todos

los ciudadanos que tengan derecho a las dos pagas.

Los peneuvistas pueden exhibir además que han logrado poner fin al mando único del Gobierno central durante el periodo de alarma sanitaria. A partir de la entrada en la fase 3, serán los presidentes autonómicos los que gestionen la desescalada. Ese acuerdo para devolver las competencias a las comunidades se basa en un texto que el PNV pactó con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y que después se ofreció a Esquerra Republicana de Catalunya. EH Bildu, que mantiene una alianza estratégica con Esquerra, quedó esta vez al margen. El pacto anterior del Gobierno con la izquierda *abertzale* había incomo-

dato especialmente al PNV en su disputa por el voto nacionalista con la organización de Arnaldo Otegi.

Frente a las críticas de otras comunidades autónomas y de la oposición en el Congreso, el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el PNV sostienen que estos acuerdos no responden a ningún “trato de favor” por la necesidad que el Ejecutivo tiene de sus votos, sino al respeto “más escrupuloso a la Constitución y al Estatuto de Gernika”.

EH Bildu, pese a todo, no insiste de seguir teniendo un papel en la política nacional y anuncia que seguirá buscando “acuerdos que beneficien a todos los trabajadores”, como el de la reforma laboral.

# Sánchez: “Hemos visto las heridas de los recortes en la sanidad”

CARLOS E. CUÉ, Madrid

**El Gobierno cambia de fase. El presidente, Pedro Sánchez, reivindicó ayer su gestión y comparó la situación española con la de países como el Reino Unido, con 1.600 contagios al día. Y criticó sin mencionarla a Madrid, la comunidad que más le ha atacado: “Ahora hemos visto las heridas que han dejado los recortes en la sanidad”. Sánchez se dispone a recuperar el pulso político y anuncia que 255.000 personas ya cobrarán el día 26 la renta mínima de inserción.**

El Gobierno lanza mensajes de alivio no solo en la epidemia, también en la economía. El Ejecutivo quiere cambiar el ambiente político y recuperar la iniciativa, con medidas positivas como la renta mínima de inserción y también empezar a hablar de la posibilidad de unos Presupuestos de reconstrucción. El presidente reivindicó ayer el “esfuerzo sin precedentes en la democracia” que está haciendo el Ejecutivo con un fondo inédito de 16.000 millones de euros para que las autonomías puedan usarlos sobre todo en sanidad y educación, y también el que se hace para los ciudadanos más frágiles con la renta mínima. El Gobierno acelera los trámites y el día 26 ya habrá 255.000 beneficiarios que la cobren, la mitad de ellos menores.

El presidente se coloca en un punto diferente al de las últimas semanas, ya pensando en el fin de lo más duro de la crisis y, por tanto, con más posibilidades para analizar lo que ha fallado y lo que hay que mejorar para el futuro. En este sentido, Sánchez hizo un reproche de fondo a las comunidades que han hecho recortes fuertes en Sanidad en los últimos años. No dio nombres, pero en el PSOE siempre se coloca a Madrid, gobernada por el PP, como la que más ha ajustado.

Sánchez rechaza la idea de que la crisis del coronavirus ha demostrado que la sanidad española es peor de lo que se pensaba. “Es lo contrario, la sanidad

española es incluso mejor de lo que pensábamos, pero hemos descubierto que no estaba cuidada como se merece. Hemos visto la reacción en cuanto se inyectan recursos, pero también hemos visto las heridas que han dejado los recortes. Ninguna circunstancia económica justifica el maltrato a nuestro sistema de salud. Eso nos hace más débiles. Lo mismo para la ciencia. La sociedad exigirá un país en el que la ciencia y la investigación sean un sector estratégico”, señaló.

Sánchez también mostró su apoyo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mientras la oposición exige su dimisión por la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos. “El señor Marlaska tiene todo el derecho a elegir a su equipo, él quiere abordar una modernización. Gámez, por ejemplo, es la primera mujer al frente de la Guardia Civil. El ministro cuenta con toda mi confianza”, insistió.

Cuando le preguntaron por las palabras de algunos ministros, sobre todo de Unidas Podemos, que hablan de ambiente “golpista”, Sánchez dio una respuesta ambigua: “Este es un Estado sólido. Las instituciones funcionan, y la Guardia Civil cuenta con nuestra confianza. Y si hay algún elemento que se aparta de eso, no compromete a la institución, sino solo a sí mismo”, señaló, dejando abierta la posibilidad de que sí haya quien pueda estar haciendo movimientos extraños, pero no algo generalizado.

## Coordinación para reabrir las fronteras a partir de julio

**Sánchez se mantuvo firme en la idea de que España sea uno de los últimos países dentro de la UE en reabrir sus fronteras. Italia, también con una presión fuerte del sector turístico, ha decidido abrir ya el 3 de junio para países Schengen. El presidente, ante una pregunta de la prensa italiana, señaló que España se mantiene en la idea de la repartura el 1 de julio. El presidente insistió en que lo importante ahora es lograr una coordinación en la UE para la reapertura de las fronteras exteriores, esto es,**

**la de los países fuera de Schengen. “No tiene sentido que cada uno abra las fronteras exteriores sin control. Debemos encontrar una solución común en base a criterios científicos”, explicó. Sánchez admitió que Alemania está trasladando mensajes estos días a sus ciudadanos para que vayan a otros países porque España mantiene la cuarentena para todos los viajeros. “Es una medida extra de control. Tenemos que ver cómo hacemos la reapertura. Daremos una respuesta segura en los próximos días”.**